

6th N-AERUS Conference. “Promoting social inclusion in urban areas: policies and practices”.

September 16/17, 2005.

Lund Institute of Technology, Lund University, Sweden

CONSTRUYENDO DESDE UN MOVIMIENTO SOCIAL: la autogestión de grandes emprendimientos.

Ainstein, Luis; Pastrana, Ernesto; Rajland, Beatriz; Scheinsohn, Mariano.
Instituto Superior de Urbanismo – FADU – Universidad de Buenos Aires

Resumen

En Latinoamérica, las operatorias de vivienda de interés social gestionadas por ONG's tienden a desarrollarse en torno de escalas acotadas y con componentes de autoconstrucción. Nuestro interés es presentar un caso de desarrollo habitacional, particularmente diferente respecto a este panorama general, y que se encuentra en desarrollo en la Ciudad de Buenos Aires.

Es un emprendimiento de envergadura llevado a cabo por una organización popular enmarcada dentro del movimiento social “piquetero”: el Movimiento Territorial de Liberación (MTL), movimiento político-social que incluye a trabajadores ocupados y desocupados que ha experimentado un gran crecimiento a partir de la crisis del año 2001.

El proyecto habitacional se financia con un crédito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es ejecutado por una cooperativa conformada a tal efecto por el MTL para construir una urbanización con aproximadamente 330 unidades de vivienda implantada en un área de renta media de la ciudad, con una localización cercana al área central principal de la metrópolis.

Resumiendo, la originalidad del proyecto deriva de:

- 1- tratarse de un emprendimiento de envergadura, con financiamiento público pero con una gestión autónoma realizada por el MTL;
- 2- la filosofía del MTL sostiene que en sus emprendimientos, los trabajadores deben resultar involucrados en una relación salarial -con los beneficios sociales e identitarios que ello conlleva-, y no transformarse en “socios” de una empresa cooperativa o del gobierno. Además, deben pertenecer a la organización;
- 3- la adjudicación de las viviendas no será necesariamente para los constructores, sino que ha de determinarse en una asamblea del MTL, sobre la base de las necesidades relativas de sus miembros.

Antecedentes y marco contextual

Antes de analizar y describir en particular el emprendimiento de vivienda popular que motiva el presente trabajo, entendemos como necesaria la explicitación y contextualización de las dinámicas socio-históricas, urbanas y políticas en las que el mismo surge y se desarrolla.

La última crisis en Argentina, que tuvo su eclosión en forma de levantamiento popular a partir de diciembre de 2001 y se extendió durante el 2002, implicó el derrocamiento de un presidente elegido por el voto, y fue la culminación de lo que podríamos denominar como un

amplio y profundo proceso de “deslegitimación socio-institucional generalizada” de rechazo de las prácticas de la política hegemónica.

Estas circunstancias tuvieron amplia repercusión internacional y motivaron más de un interrogante a los “expertos internacionales en mercados emergentes”.

¿Cómo era posible que un país con una importante dotación de recursos naturales y humanos y siendo un modelo para toda Latinoamérica en la aplicación irrestricta (sin cuestionamientos) de las políticas de desregulación y privatización (neo-liberales) durante la década del '90 alcanzara tal nivel de descomposición y crisis a comienzos del siglo XXI?

Por supuesto que estas transformaciones no son ni repentinas, ni caóticas -más allá de su aparente desorden- sino que representan un proceso paulatino pero acelerado que comienza a mediados de los setenta y que se manifiesta, principalmente, a partir de la modalidad que asume en la Argentina la crisis del Welfare State.

Esta profunda crisis y transformación del Estado de (Semi)Bienestar¹ (Minujin, 1992)

-que se fue consolidando desde la “década peronista” (1946-1955) hasta fines de los sesenta- tuvo la peculiaridad de que se produjo conjuntamente con la instauración de un “terrorismo de Estado” comandado por el gobierno militar de facto llamado “Proceso de Reorganización Nacional” que asume el gobierno por la fuerza en 1976².

La combinación entre el comienzo de un periodo de crisis socio-económica-reproductiva³ y la instauración de un terrorismo burocrático-estatal, apuntalado -a posteriori- por políticas económicas de ajustes recurrentes (neo-liberales) produjo, entre otras cuestiones de relevancia, un profundo e ininterrumpido proceso de deslegitimación del Estado y del aparato político en general; conjuntamente con un quiebre y desintegración de los lazos sociales.

El paulatino desmantelamiento de las políticas keynesianas y el bloqueo del pacto social “integrador” asociado a éstas, produjeron un incremento de las demandas por espacios de mediación y socialización político-identitaria más allá de los canales formales.

En este escenario, surgieron nuevas expresiones políticas relacionadas con los sectores sociales (mayoritarios) que padecieron más severamente los efectos de estas políticas y crisis combinadas, que con el transcurrir de los años tendieron a expandirse y a consolidarse.

Una característica significativa de estas nuevas modalidades de demanda social, que comienzan a aparecer a comienzos de la década de 1980 y que se generalizan y consolidan entre mediados y fines de los años '90, se encuentra representada en el modo “territorializado” en que se manifiestan los reclamos.

Esto significa, básicamente, que frente al desmembramiento de los ámbitos tradicionales de mediación política (sindicatos, partidos políticos) como efecto tanto de la crisis de la sociedad salarial como de la implementación de un terrorismo de Estado; la conflictividad social tiende a producirse y manifestarse, preponderantemente, en aquellos ámbitos donde aún persisten los espacios de negociación, conflicto y socialización: el territorio.

No es casual que una manifestación clara del comienzo de esta “especialización” de los conflictos haya sido la lucha por la ocupación de tierras urbanas en la periferia de Buenos Aires -asentamientos- a comienzos de la década de 1980, en pleno gobierno militar (Clichevsky, Schapira y Schneier, 1990); (Izaguirre, 1991).

¹ En referencia a la modalidad limitada que asume el Welfare State en Argentina y en general en Latinoamérica.

² Resulta imposible extendernos en este punto, pero este golpe de estado se desarrolló en el contexto del impacto de la Guerra Fría en toda Latinoamérica (Plan Cóndor).

³ Por crisis socio-económica-reproductiva entendemos una transformación mutuamente interrelacionada entre los niveles de la producción económica, la estructura social y la reproducción tanto de fuerza de trabajo como de segmentos socio-económicos.

Este tipo de conflictos territorializados comienzan a generalizarse y a ser el modo predominante de demanda social (protesta social) recién a partir de la década de 1990, como producto del acelerado proceso de reforma económica (desregulación, privatizaciones de los servicios públicos y reforma del Estado) y su consecuente desocupación estructural generalizada. Aunque, también, desde hace poco tiempo se han intensificado una serie de conflictos gremiales, en su mayoría aislados, reclamando mayores salarios, lo que podría indicar el comienzo de una etapa signada por una puja distributiva del ingreso llevada a cabo por grupos de trabajadores sindicalizados o algunos sindicatos al margen de la CGT oficial. Algunas cifras indicadoras de la situación social, emitidas por organismos oficiales, resultan relevantes en relación al contexto y a sus profundos cambios, escenario sobre el cual ocurren los procesos que aquí se están relatando.

En la Argentina, entre octubre de 2001 y el mismo mes del año 2002, la cantidad de hogares pobres creció un 55%, y los hogares indigentes aún más, el 73%. El 58% de la población residente en la Argentina pertenecía a un hogar pobre en el último año mencionado. En el 2003 la distribución de ingresos fue la más regresiva desde 1974, fecha en que se comenzó a medir. La diferencia entre el monto de ingreso percibido por los pertenecientes al primer decil (más pobre) y al último (más rico) en octubre de 2002 superó las 30 veces. Se duplicaron los habitantes de “villas miseria” en la Ciudad de Buenos Aires durante la década transcurrida entre los años 1993 y 2003 -pasó de 52.000 a 112.000 personas-, y se crearon ocho nuevos asentamientos. El impacto sobre el mercado de trabajo de la aplicación de las políticas neoliberales y de la crisis de 2001 fue devastador: la tasa de desocupación abierta ascendió a 21,5% de la población económicamente activa urbana en mayo de 2002, a lo que hay que adicionarle en esa misma fecha la subocupación, que alcanzó el 18,6%. De los trabajadores ocupados, algo menos de la mitad estaba en “negro”, es decir, no contaba con ningún servicio de prestación social.

El “Movimiento Piquetero”

En este contexto empieza a cobrar amplia visibilidad pública dentro de los repertorios de acción colectiva el “piquete”, como la principal modalidad de demanda y protesta social de los “marginados, parias y empobrecidos” del nuevo modelo de acumulación. Esta acción consiste, básicamente, en la interrupción del tránsito vehicular, o del transporte en general, en las principales arterias viales y de comunicación (calles, rutas, puentes, avenidas); tiende a movilizar una importante cantidad de personas -varios cientos o miles- y, muchas veces, se encuentra ramificada en diversos piquetes en torno a distintos puntos “estratégicos”.

El reconocimiento público de dicha modalidad tiene su momento clave a partir de las experiencias concretadas en Cutral Co en 1996. Se trata de una ciudad pequeña de provincia que creció alrededor de las actividades de la empresa estatal de petróleo

-YPF-, y el importante “piquete” de aquel momento fue una expresión de “protesta” frente a los efectos devastadores que tuvo la privatización de la misma sobre toda la comunidad de esa ciudad.

El “piquete”, entonces, se va constituyendo, en todos estos años, como la manera en que se efectiviza la construcción social de una modalidad de intervención y socialización política de los sectores sociales marginados de los espacios tradicionales de mediación con el Estado.

Esto es parte, también, de un proceso que se vincula con la “inscripción territorial” de las clases populares (Merklen, 2004) frente a, por un lado, la desafiliación social masiva relacionada con la crisis del pacto social que se sustentaba en la prevalencia de la relación

salarial como el modo predominante de socialización socio-política y reproductiva de los trabajadores (o fuerza de trabajo); y, por el otro, con un profundo y persistente proceso de deslegitimación de las instituciones públicas estatales y del sistema político en general.

El piquete busca y utiliza la presencia mediática como un modo fundamental de intervención y socialización políticas en el escenario público. Su interlocutor principal (en una primera instancia) es el Estado, y el reclamo por las políticas de reforma. Con posterioridad, a partir de la crisis 2001, comienza a incluir como interlocutores a las empresas y a la opinión pública en general frente a la profunda deslegitimación del Estado.

Justamente, este periodo marca un momento de reorganización y de replanteos de las organizaciones piqueteras, tanto de las que se fueron consolidando durante los años '90 como de las nuevas manifestaciones surgidas a partir de la generalización de las demandas y luchas como consecuencia de este escenario -surgimiento de nuevos movimientos piqueteros, el auge y comienzo de la crisis de los "clubes de trueque" y la aparición de nuevas formas organizativas como las "asambleas populares" (PNUD, 2003)-.

Frente a un Estado con todas sus instituciones en crisis, y una práctica política tradicional deslegitimada, algunas de estas organizaciones tienden a reforzar y a consolidar sus capacidades autogestivas, enarboladas como principio de su accionar. Otras, en cambio, ante la puesta en práctica de mecanismos de cooptación por parte del gobierno -a partir de 2003-, se insertaron a través de sus dirigentes, en instancias públicas gubernamentales como un modo de articular las mediaciones políticas representativas de los "pobres urbanos" y como gestores reconocidos en la distribución de asistencia social a cambio de abandonar la lucha en las calles por la obtención de políticas oficiales de promoción en la creación de fuentes de trabajo.

Resulta interesante remarcar que el mayor reconocimiento político de las organizaciones piqueteras se produce en el contexto del aumento de las demandas sociales vinculadas con la crisis (2001-2002), cuando éstas se expanden masivamente en los barrios populares de la Región Metropolitana de Buenos Aires, alcanzando su pico de presencia público-mediática, y por lo tanto convirtiéndose en un actor político "privilegiado", representante legítimo (para la opinión pública en ese momento) de las demandas populares.

De alguna manera, estas organizaciones, o movimiento, que comenzaron siendo un actor marginal, informal y deslegitimado frente al Estado, van cobrando legitimidad e importancia política en el mismo proceso en que el Estado pierde su capacidad legitimante.

Sería imposible extendernos en este punto en el presente trabajo, sin dejar de afirmar que estas organizaciones logran instalarse de un modo preponderante en la escena pública y de esta forma convertirse en un actor político de relevancia en todo este periodo⁴.

Resulta claro también que el movimiento piquetero se instala a partir del año 2002 como un mediador privilegiado en la gestión y distribución de la asistencia social.

Los programas de asistencia social que surgen en este periodo (frente a la emergencia de la crisis) resultan un medio idóneo a través del cual el Estado intenta, por un lado, recomponer su capacidad legitimante y, por el otro, contener el movimiento social que ya se había desbordado y que amenazaba seriamente la supervivencia de toda la estructura política (partidos políticos, sindicatos, etc.).

Como respuesta frente a esta política, las organizaciones piqueteras tienden a diferenciarse en sus tácticas y estrategias frente al Estado.

⁴ Esta situación aún persiste, a pesar de que estas organizaciones piqueteras han sufrido un importante desgaste y fragmentación, con la consecuente pérdida de legitimidad frente a la opinión pública, a partir de la recomposición de las organizaciones políticas tradicionales y de las capacidades legitimantes del Estado

Como ya mencionamos, una parte de las mismas son cooptadas en el ámbito público estatal tanto en carácter de destinatarios, como de mediadores privilegiados de la política social. En cambio, otras resuelven utilizar los recursos de la asistencia estatal, así como del reconocimiento público que esta política del Estado genera, para producir procesos autogestivos que sostengan su independencia política frente a aquél.

Esta situación promueve, en aquellas organizaciones que adoptan esta última postura política, el surgimiento de una profusa diversidad de micro-emprendimientos productivos, y una fenomenología de organizaciones y transacciones que habitualmente se denominan como “economía social o solidaria” (clubes del trueque, producción artesanal a pequeña escala para mercados informales, etc.,).

El MTL y el Estado: un contexto favorable

En este sentido, el Movimiento Territorial de Liberación tuvo su surgimiento en la Ciudad de Buenos Aires a través de la lucha y de la resistencia frente a los desalojos de inmuebles ocupados por sectores de bajos ingresos entre los años 2000 y 2001 (cuestiones sobre las que el Estado prácticamente no tuvo políticas explícitas, o que resultaron insignificantes en relación con la escala de la problemática), y tendió a evolucionar como organización piquetera según la modalidad señalada anteriormente.

El MTL se consolida como una organización piquetera a través de su expansión en diversas regiones del país a partir del año 2001 y 2002, dentro de contextos predominantemente urbanos.

La misma asume su carácter de movimiento y, con el transcurso del tiempo, adopta una táctica de doble acción: producir posibilidades de trabajo, vía la promoción y organización de emprendimientos productivos, y exigir a las instituciones de Estado la cobertura social de una asistencia mínima.

Esta duplicidad característica -que es común a un sector de las organizaciones piqueteras- le otorga, por una parte, una permanente interlocución con las instancias estatales pero, por otra, le permite obtener ciertos grados de independencia política frente a las instituciones tradicionales (gobiernos, partidos políticos, sindicatos).

Resulta importante aclarar que este movimiento se nutre también de militantes sociales y políticos de izquierda de larga tradición que buscan su inscripción en una organización política que responde a las nuevas circunstancias, por fuera de los partidos políticos deslegitimados.

En este contexto y escenario descritos sintéticamente -que resulta imprescindible para su comprensión- surge y se constituye el proyecto de vivienda popular de la calle Monteagudo (de la Ciudad de Buenos Aires) elaborado, gestionado y conducido por el MTL, en el que concurren diversas circunstancias, más allá de las mencionadas, que lo tornan viable.

En las condiciones generales resultan concurrentes, por un lado, como ya mencionamos, el proceso de legitimación de las organizaciones piqueteras como destinatarios y mediadores “naturales” de la política social en el actual contexto y, por el otro, la necesidad del Estado de reconstruir su capacidad de gobierno, y por lo tanto, de legitimación.

Dicho contexto facilita el diálogo entre los dirigentes del MTL y los responsables de la ejecución de las políticas estatales habitacionales en la ciudad, y se constituye en un escenario propicio para la realización de un emprendimiento de vivienda popular gestionado, elaborado

y conducido por una organización político-social con características autónomas respecto del Estado (y de las políticas de gobierno).

Sería extenso de explicar las transformaciones y dinámicas de la política pública de acceso a la vivienda popular en el contexto de la ciudad de Buenos Aires y de toda la Región Metropolitana. Sin embargo, resulta necesario indicar que, en los últimos veinte años, la producción de vivienda pública de interés social por parte del Estado resultó muy escasa, o casi nula, frente a una problemática que fue creciendo en importancia.

La resolución de esta necesidad por parte de los sectores sociales de bajos recursos consistió - como sucede en la mayor parte de las metrópolis latinoamericanas- en la utilización de mecanismos informales de ocupación de suelo urbano disponible⁵ mediante tomas colectivas de terrenos, asentamientos irregulares (“villas miseria”) (Yujnovsky, 1984), a través de la ocupación de inmuebles desocupados o en desuso (Rodríguez, 1997), o como inquilinos de viviendas colectivas populares de alquiler (conventillos y hoteles-pensión) (Pastrana, 1995). Todas estas modalidades funcionaron, y lo siguen haciendo en la actualidad, dentro de una lógica de mercado “informal” de vivienda popular.

Desde esta perspectiva, la reorientación de la política del Instituto de la Vivienda (del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), en el marco jurisdiccional de esta ciudad, hacia la radicación de las “villas miseria” a partir de su reordenamiento físico -con el objetivo de su integración con la trama y tejido de la ciudad- es una de las pocas acciones gubernamentales llevadas a cabo en este sector con cierto grado de relevancia.

El MTL y el Proyecto Monteagudo: su carácter peculiar

En este sentido, dentro del mencionado contexto, el proyecto de vivienda popular desarrollado por el MTL, y financiado y asesorado por el Instituto mencionado tiene un carácter peculiar, por diversos aspectos.

Una cuestión de importancia y que marca una primera diferenciación respecto a ciertas características habituales en otros proyectos de vivienda popular, es su localización dentro de la ciudad.

Este emprendimiento no se ubica en un área típica de desarrollo de este tipo de viviendas. Por el contrario, su emplazamiento se localiza en un tradicional “barrio” residencial de clase media trabajadora (Parque Patricios) ya consolidado desde mediados del siglo XX. Dentro de la estructura urbana de la ciudad, esta es una zona cercana al área central principal, con muy buena cobertura de transporte público, equipamiento y servicios urbanos, ubicado en el sector sur -más allá de que, en términos generales, este sector de la ciudad encuentra menores niveles de desarrollo y de calidad de vida que el sector norte, de todas maneras, dentro del primero, es una de sus mejores áreas-.

Asimismo, dentro de la escala del barrio, el emprendimiento se desarrolla a cuatro cuadras de un gran parque y de la principal zona comercial y de transporte. Su entorno edilicio inmediato se encuentra configurado principalmente por un sector de fábricas y depósitos en desuso, o con algún grado de obsolescencia. Esta fue una de las razones que posibilitaron la disponibilidad de un amplio terreno dentro de una zona residencial consolidada⁶.

⁵ Disponibilidad derivada por su condición de no apto para su urbanización (inundable o cercano a fuentes de contaminación) o por ser espacios vacantes de equipamientos en desuso o con algún grado de deterioro y obsolescencia

⁶ Este terreno estaba ocupado por una fábrica abandonada de pinturas, vinculada a una importante empresa transnacional (Bunge y Born), desactivada hace 20 años.

En los hechos, y como otra característica peculiar de este proyecto, su desarrollo en gran escala abarca un terreno de 18.000 m² (casi 2 hectáreas), y la construcción, 326 unidades de vivienda en edificios de 2 y 3 pisos, dentro una zona con tejido compacto y consolidado.

Este emplazamiento no es casual, y se relaciona con la intención explícita de los dirigentes del MTL respecto de este proyecto. Como señala uno de los responsables máximos de esta organización (Carlos Chile): "...lo que queremos es que este conjunto (de viviendas) de la calle Monteagudo no se transforme en un depósito de pobres. Al contrario la idea nuestra es incorporarlo al barrio, darle mucha vida social. No sólo que accedan a la vivienda, sino ayudar a cambiarla en un proceso que, por supuesto, (...) está atado a la realidad del país."

Por esta razón buscaron un terreno en un barrio o zona que no fuera típicamente de viviendas de interés social, sino que, por el contrario, tuviera un emplazamiento que desde el inicio del proyecto permitiera la integración socialmente heterogénea de los futuros residentes del proyecto habitacional con un barrio tradicional de la ciudad.

En este sentido, el diseño del proyecto consideró esta cuestión, y por ello incorpora dentro del mismo la apertura de una calle (José C. Paz) que divide al conjunto en dos mitades y preserva la continuidad de la trama existente, conservando la ortogonalidad del amanzanamiento (condición indispensable para su integración, al menos física, con el barrio). También considera la apertura de diez locales comerciales que dan a la calle y otras seis unidades de equipamiento social y comunitario.

Una de las ideas que sostiene el proyecto es que este no debe cerrarse al barrio, sino que, por el contrario, necesita contener y recrear espacios públicos y comunitarios de integración con el entorno, para, de este modo, intentar evitar la lógica de enclave que habitualmente se produce en los conjuntos de viviendas populares.

Si bien las viviendas aún se encuentran en construcción y todavía falta tiempo para verificar si este objetivo logra ser concretado, podemos señalar, sin embargo, que la respuesta de los vecinos del entorno inmediato del conjunto fue variando con el tiempo.

En un principio la idea de que se instalaran "piqueteros" en el barrio fue muy mal recibida - recordemos que en Argentina los "piqueteros" son la imagen prototípica del "paria urbano"- ya que tal incorporación era vista como una amenaza a la seguridad y una profundización de la degradación que ya venía existiendo.

En la medida en que la obra fue progresando y comenzó a vislumbrarse su lógica constructiva y de emplazamiento, los vecinos comenzaron a mirar con "mejores ojos" al emprendimiento, debido, fundamentalmente, a que traía un nuevo dinamismo a un barrio que -con un importante componente residencial- se encontraba degradado por la existencia de muchas unidades desocupadas y obsoletas de antiguos depósitos, fábricas y talleres desactivados hace años. En los hechos, muchos de ellos comenzaron a instalar locales comerciales en los frentes de sus propias casas que dan a la calle, previendo la futura residencia de un importante contingente de personas (alrededor de 1.500).

Paradójicamente, pareciera que este emprendimiento autogestionado por una organización política procedente de un sector social estigmatizado promueve una redinamización⁷ de un sector urbano que se encontraba estancado.

De todas formas, todavía resulta muy temprano para afirmar categóricamente tal cuestión, pero no deja de ser un indicio del modo peculiar en que se integra este conjunto residencial con su entorno.

⁷ Desde ya que por las características socio-económicas del sector social al que nos referimos no podemos hablar de "gentrification" ¿Existirá algún término que se adecue más precisamente a esta fenomenología?

En este sentido, un dato interesante de señalar es que el diseño del proyecto fue realizado por un estudio de arquitectura (Estudio Pfeifer-Zurdo) que habitualmente no se dedica al diseño de vivienda popular sino que, muy por el contrario, realiza obras importantes orientadas a un segmento de mercado de alto poder adquisitivo (shopping malls, edificios de alta renta, emprendimientos comerciales). La implicación de este Estudio con este proyecto se dio como consecuencia de la elección del MTL debido a una peculiar vinculación de sus dirigentes con los arquitectos que lo integran.

Más allá de lo particular y personal de esta conjunción, resulta interesante remarcar la utilización de un carácter constructivo menos típicamente estigmatizado respecto a otros emprendimientos de vivienda popular, sobre todo en lo que respecta a la utilización de equipamientos y materiales de calidad relativamente alta.

Todas las características mencionadas remiten claramente a la peculiaridad de este emprendimiento. Es un proyecto autogestionado pero no de autoconstrucción, sino que se plantea la realización de una obra de gran escala desde una logística empresarial pero bajo la modalidad de una gestión social y política autónoma.

Esta situación no se desarrolló sin conflictos, como señala Carlos Chile: "... estábamos en condiciones de comenzar, entonces vinieron del Instituto a proponer que una empresa constructora iba a realizar la obra. Le dijimos que nosotros mismos como empresa íbamos a construir. Nos respondieron que estábamos locos de verdad... Eso es imposible. Nos decían que no podíamos abarcar todo lo que hace a la construcción de 326 viviendas y diez locales comerciales a la calle. (...) Ese fue el momento de mayor lucha y de muchas presiones. Y así ahora lo estamos haciendo. Esto es de nuestra responsabilidad y les estamos probando que se puede hacer. Y sabemos que en la oficina de compras no pasa nada 'por debajo de la mesa'..."

En este sentido, resulta claro que la operatoria que permitió la viabilidad del proyecto fue consecuencia de una concurrencia, ya mencionada, entre la reorientación política del Instituto de la Vivienda hacia un gerenciamiento social tercerizado de sus proyectos, y la necesidad del MTL de generar un emprendimiento a gran escala que le otorgase visibilidad pública y eficacia política sin perder ciertas condiciones de independencia y autonomía relativa de decisión.

Otro punto importante es la modalidad de financiamiento utilizada. El origen de los fondos para la adquisición del terreno y el financiamiento de la obra fue mediante un crédito blando a 30 años del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (banco público) que fue otorgado a una cooperativa conformada por el MTL.

Resulta importante mencionar que el modo de gestión del emprendimiento no es cooperativo, sino que esta organización fue creada a los puros efectos formales y legales de garantía y personería jurídica. Por el contrario, la gestión es llevada a cabo por el conjunto de la organización social y bajo la modalidad política del Movimiento. Esto significa que los operarios que trabajan en la obra (que son aproximadamente 200 personas) no necesariamente integran la cooperativa de trabajo, pero sí son políticamente parte del Movimiento y se constituyen como trabajadores en relación de dependencia del MTL, cobrando un salario.

Tal condición, que puede considerarse controvertible, responde a una intencionalidad explícita de la organización piquetera, que es la de reconstruir una cultura del trabajo entre sus miembros. Tengamos en cuenta que una gran parte de sus miembros, sobre todo de las generaciones más jóvenes, jamás tuvieron ningún trabajo formal, y que la participación en este proyecto implicó todo un aprendizaje de los códigos y convenciones del trabajo asalariado, como por ejemplo el cumplimiento de una jornada de trabajo, la coordinación de los momentos de descanso, la adquisición de un ritmo y disciplina laboral, etc.

Como afirma uno de los dirigentes del MTL: "...fijáte que esta es una cooperativa de vivienda donde los compañeros que trabajan no son cuentapropistas, eso lo debatimos mucho. Constituimos el MTL en empresa constructora y acá todos los compañeros tienen todos sus beneficios, trabajan bajo las normas del convenio de la construcción, cobran sus cargas sociales, son 'obreros de la construcción'. (Esta situación) en la cual los compañeros son dueños de su propia empresa, significa autodisciplina, esforzarse mucho. Acá todos los salarios se pagan en blanco."

En este sentido queda bien claro en qué medida este emprendimiento, si bien tiene un importante componente de autogestión, no constituye un proceso de autoconstrucción, ya que los trabajadores en la obra no construyen su propia vivienda, sino que son empleados por el MTL, cobrando un salario y siendo capacitados en el oficio de la construcción en un marco similar al de cualquier empresa constructora.

Un dato interesante de resaltar es la modalidad que va a adquirir la lógica de asignación de las viviendas a las distintas familias, una vez finalizada la obra. La misma no va a estar constituida, en forma prioritaria, por la participación que haya tenido cada una de las personas seleccionadas en el proceso de construcción del conjunto habitacional, sino que va a tener una lógica política y social coherente con las modalidades organizativas del Movimiento. Es decir que la asignación va a estar modulada por la implicación política en la participación de cada uno de los miembros, así como también por las condiciones residenciales y ambientales de cada núcleo familiar.

Detrás de esta idea se encuentra la convicción de que este emprendimiento, por las características ya analizadas, debe ser un modelo de integración con el barrio, y por esta razón se busca que sean los "mejores" miembros del movimiento los que residan en este conjunto.

Esta característica puede sugerir cierta meritocracia política detrás de este mecanismo de asignación, pero también resulta cierto que al ubicarse en una lógica de gestión social y política alejada de la lógica tecnocrática, tiene que asumir una metodología de selección más allá de indicadores cuantitativos tecno-burocráticos.

En definitiva, la implicación política de cada miembro del Movimiento y su participación resulta altamente diferenciada en este tipo de organizaciones políticas heterogéneas y flexibles, a diferencia de las organizaciones políticas tradicionales, con estructuras más institucionalizadas y burocratizadas. Por tal motivo su incidencia en la dinámica de la organización del MTL resulta altamente relevante y definitoria del desenvolvimiento y eficacia social y política del movimiento piquetero.

En definitiva, este emprendimiento marca una interesante combinación de diversas modalidades de operación y gestión que le otorga un carácter peculiar y provocativo dentro de lo que habitualmente sucede en el universo de emprendimientos llevados a cabo por organizaciones sociales.

Resulta un intento sumamente interesante de incorporar económica y socialmente a este tipo de organizaciones (piqueteras) más allá de la lógica microemprededora dirigida hacia la "economía social". En cambio, se instala como un emprendimiento a gran escala, insertándose en los mecanismos habituales de la actividad económica formal de este sector (la construcción), pero bajo una modalidad de gestión "social" y participativa. En los hechos es intención del MTL, al constituir esta empresa constructora, poder participar a futuro en licitaciones de obras públicas.

Consideraciones Finales

El proyecto del conjunto de viviendas populares de la calle Montegudo, desarrollado por la organización piquetera MTL, como ha sido demostrado, resulta un caso heterodoxo dentro del conjunto de emprendimientos habitacionales en los que habitualmente participan las organizaciones sociales y ONG's.

Tal peculiaridad permite visualizar con un mayor grado de amplitud las diferentes posibilidades de actuación en el marco de proyectos de vivienda de interés social con el objetivo de promover procesos socialmente inclusivos, en contextos urbanos valiosos.

Todavía es muy temprano para dictaminar el éxito de este emprendimiento en este sentido, pero de todas maneras podemos afirmar que, en función de la modalidad que

asume la ejecución del mismo, éste va construyendo una dinámica social de implantación urbana -tanto por su emplazamiento como por su inserción dentro del entorno inmediato- que supera los típicos procesos residenciales de enclave estigmatizados con los que tan habitualmente se encuentran asociados las operatorias de construcción de vivienda social.

Adicionalmente, su modalidad de gestión y su particular vinculación con el Estado -siendo destinatario de una política pública específica-, conserva a la vez importantes niveles de decisión autónoma, conformando un escenario específico de articulación entre los distintos actores, y estableciendo parámetros diferenciados de asignación de recursos, tanto a nivel de la capacitación, formación, y empleabilidad de sus miembros, dentro de la lógica del mercado de trabajo, como de la distribución de las viviendas y de sus recursos productivos (talleres, comercios, etc.).

Finalmente, una cuestión que nos parece importante señalar es que no nos interesa proponer que el presente caso se constituya necesariamente en una "buena práctica" en la ejecución de viviendas populares. Esto porque entendemos que, por una parte, la replicabilidad del mismo resulta una cuestión compleja, en la medida en que su concreción estuvo asociada a una concurrencia oportuna entre una gran cantidad de particularidades, y, por otra, porque nos interesa más destacar la amplitud de posibilidades de ubicación, emplazamiento y de gestión diversa y flexible que es posible desarrollar en este tipo de emprendimientos -dentro de contextos metropolitanos latinoamericanos- con el objetivo de desarrollar procesos sistémicamente eficaces de inclusión social.

Referencias Bibliográficas

Clichevsky, N. 1990. *Loteos populares, sector inmobiliario y gestión local en Buenos Aires*. CEUR-CREDAL, Buenos Aires.

Izaguirre, I. et.al. 1991. *Las tomas de tierras en la zona Sur del Gran Buenos Aires*. CEAL, Buenos Aires.

Merklen, D. Sobre la base territorial de la movilización popular y sobre sus huellas en la acción. *Revista de Estudios Sobre Cambio Social*, Año IV, N. 16, 2004

Palomino, H y Pastrana, E. 2003. El caso argentino: los nuevos movimientos sociales en Calderon, F. *¿Es sostenible la globalización en América Latina?. Debates con Manuel Castells*". PNUD - Bolivia y Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile.

Pastrana, E. et.al. Vivir en un cuarto: Inquilinatos y hoteles en Buenos Aires. *Medio Ambiente y Urbanización*, Año 13, N. 50/51, 1995

Rodríguez, M.C. 1997. *Ocupaciones de edificios, autogestión, políticas del hábitat y derecho a la ciudad*. CEUR, Buenos Aires.

Yujnovsky, O. 1984. *Claves políticas del problema habitacional argentino*. GEL, Buenos Aires.

Entrevista a Carlos (Chile) Huerta, Coordinador Nacional de Emprendimientos del MTL. *Vivienda Popular* N° 55, abril 2005. Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias, Buenos Aires.